EXP: 02-010524-0170-CA

RES: 000903-F-04

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José a las nueve horas veinticinco minutos del veintiuno de octubre del año dos mil cuatro.

Excepción de prescripción dentro del proceso ejecutivo establecido en el Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios por “**INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS**”, representado por su apoderado general judicial, licenciado Roberto Zaldívar Gómez; contra **OMAR MORA BERMÚDEZ**, vecino de San Vito de Coto Brus, Puntarenas. Figura como apoderada especial judicial de la actora, la licenciada Leda Montoya Aguilar, divorciada. Las personas físicas son mayores de edad y con las salvedades hechas casados, abogados y vecinos de San José.

RESULTANDO

1º.- El Juez Jorge Arturo Rodríguez Cruz, en sentencia N° 537-03 de las 16:00 horas del 13 de mayo del 2003; **resolvió:** “En mérito de lo expuesto, citas de ley, se rechazan las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación ad causam activa y pasiva, falta de causa y de prescripción opuestas por el demandado. Se acoge el proceso ejecutivo establecido por INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS contra OMAR MORA BERMÚDEZ, a quien se le condena a cancelarle a la parte actora por concepto de incapacidad temporal, rentas establecidas y prestaciones médicas la suma de **SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO COLONES**. Asimismo se le impone el pago de los intereses al tipo de ley por el período que va del diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve al diez de junio del dos

mil dos, al veintidós por ciento anual, en la suma de CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS DOCE COLONES NOVENTA Y UN CENTIMOS. Se le imponen también los réditos futuros hasta el efectivo pago de principio adeudado y ambas costas de esta ejecución. Por improcedente se rechaza el rubro de gastos administrativos que conforma la pretensión material de este sumario. Se confirma la ejecución despachada y los embargos decretados en forma interlocutoria. Una vez firme esta resolución, cúmplase."

2°.- El demandado apeló y el Juez Felipe Gutiérrez Salicetti del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en sentencia N°530-2003 de las 8 horas 35 minutos del 11 de agosto del 2003, **dispuso:** "Se revoca la sentencia apelada. Se acoge la defensa de prescripción y consecuentemente sin lugar la demanda en todos sus extremos. Se omite pronunciamiento sobre las restantes defensas por innecesario. Se revoca la ejecución y embargo dispuesto en forma provisional y se ordena el archivo del expediente. Sin especial condena en costas."

3°.- La Licda. Montoya Aguilar, en su expresado carácter, formula recurso de casación por el fondo. Alega indebida aplicación del artículo 304 del Código de Trabajo y falta de actuación del 869 inciso 2) del Código Civil.

4°.- En los procedimientos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Solís Zelaya

CONSIDERANDO

I.- El Instituto Nacional de Seguros entabló proceso ejecutivo contra Omar Mora Bermúdez, solicitando se decrete embargo por el monto de ¢1.111.684,91, deuda proveniente de las prestaciones médicas otorgadas a

Jhonny Rojas Torres, trabajador del ejecutado, como consecuencia del accidente laboral que sufrió el 21 de diciembre de 1994, pues no estaba cobijado por una póliza contra riesgos del trabajo. El señor Mora Bermúdez se opuso y arguyó la “excepción genérica de sine actione agit” la cual estimó comprensiva de falta de derecho y causa, así como prescripción de capital e intereses. El Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios rechazó las excepciones y acogió la pretensión ejecutiva en la suma de ¢693.418,00 por concepto de prestaciones médicas, y ¢411.312,91 tocante a intereses. Ante reclamo del ejecutado, el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda revocó la sentencia y, en su lugar, declaró prescrita la pretensión ejecutiva para dejar sin efecto el embargo decretado. Disconforme con lo decidido, la aseguradora interpone recurso ante esta Sala.

II.- Expone dos censuras por razones de fondo. **Primero.** Reputa error de derecho al declarar prescrito el cobro con base en el ordinal 304 del Código de Trabajo, pues la norma se refiere únicamente al reclamo de los derechos del trabajador accidentado o sus causahabientes, siendo que al caso deben aplicarse las normas civiles, pues se trata de un proceso de ejecución en esa sede. En consecuencia, expresa, el plazo de prescripción es de tres años, según lo previsto en el artículo 869 inciso 2 del Código Civil. El cómputo, añade, corre a partir del momento en que el trabajador es dado de alta, es decir, el 19 de octubre de 1999, por lo que se hubiera cumplido en esa misma fecha del año 2002, empero, sostiene, se interrumpió con el emplazamiento notificado el 27 de agosto de ese año. Cita jurisprudencia de esta Sala en torno a este instituto, así como antecedentes de otros órganos jurisdiccionales. **Segundo.** Asegura erróneamente aplicado el artículo 304 del Código de Trabajo, y falta de actuación

del ordinal 869 inciso 2 del Código Civil. Afirma que no corresponde atender el plazo establecido en el numeral 304 del Código de Trabajo, sino el regulado en el canon mencionado del Código Civil, como hizo el A Quo, todo lo cual permite concluir que su reclamo no está prescrito.

III.- La recurrente plantea una única censura contra el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo bajo un doble perfil, pues inicialmente la califica -erróneamente- como error de hecho, e inmediatamente acierta al invocarle como violación directa de normas. Bajo este último cariz será conocido el reparo, por cuanto no supone un error material en la comprensión del contenido de un medio probatorio, tal y como ha explicitado esta Sala que entraña el vicio indirecto por error de hecho, sino que ataca indebidamente aplicada una norma relativa al instituto de la prescripción, y no actuada la que, en su criterio, resuelve el sub-júdice.

IV.- El Derecho, como producto de ideologías validadas en determinadas circunstancias históricas, políticas y culturales, supone la interrelación de principios o valores que, llevados a sus últimas consecuencias, podrían conducir a resultados opuestos, por lo cual deben ser armonizados con el fin de poder afirmar al Ordenamiento como un cuerpo orgánico, sistemático y sin contradicciones internas. De este modo, aún cuando, en principio, el ideal de justicia se cierce como materia prima de todas las normas jurídicas, en algunas oportunidades cede a favor de otras aspiraciones, tales como la seguridad jurídica. Es bajo el influjo de esta última, que el instituto de la prescripción encuentra sentido, porque rehúsa brindar tutela a aquél, que ostentando un derecho subjetivo, ha dejado transcurrir un determinado lapso sin gestionar, en modo alguno, su resguardo. Es, en suma, una sanción a la inacción del titular,

pues la jurisdicción, ante protesta del decurso sin ejercicio del derecho, una vez constatado, debe declarar prescrito el reclamo.

V.- El Instituto Nacional de Seguros manifiesta haber cubierto, por concepto de riesgos del trabajo, el monto de ¢700.372,00 a favor de Jhonny Rojas Torres, quien se desempeñara como empleado del ejecutado. En la especie, las partes han venido discutiendo acerca de cuál es la norma de prescripción aplicable al cobro ejecutivo. Inicialmente el Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios declaró haber lugar a las pretensiones ejecutivas, y denegó el reclamo de prescripción al estimar aplicable el ordinal 869 en su segundo inciso del Código Civil, no así el Juzgado Contencioso Administrativo, el cual, ante censura del ejecutado, modificó el pronunciamiento al actuar el artículo 304 párrafo primero del Código de Trabajo, para acoger la decadencia del derecho a reclamar. Previo a dilucidar el extremo, es oportuno realizar algunas precisiones conceptuales.

VI.- En la especie, se está en presencia de situación compleja, pues por un lado se encuentra una de las garantías que compone la seguridad social, particularmente en cuanto a riesgos del trabajo, y por el otro las obligaciones que surgen entre la aseguradora y el empleador de mediar un accidente laboral, merced a un contrato de seguro, o sin él. Sobre la primera vertiente, el seguro contra riesgos del trabajo constituye un derecho fundamental del empleado, el cual, al tenor de lo señalado en el canon 73 in fine constitucional, corre a cargo del patrono. En consecuencia, genera la correlativa obligación del empleador de asegurar a sus subordinados, por lo cual se establece con carácter forzoso (artículo 201 del Código de Trabajo). Sin embargo, concibiéndose la posibilidad de que tal deber fuera inobservado por quien lo soporta, se dispuso que los

afectados por menoscabos de esta naturaleza, podrán devengar las cantidades a las que se hubieren hecho acreedores, de haber estado amparados por el seguro. Con el fin de no dejar desprotegido al empleado, estas sumas deben ser cubiertas al trabajador por el Instituto Nacional de Seguros. Así las cosas, se crea una obligación a cargo de la aseguradora, cuya fuente es el poder heterónimo del Estado, manifestado en su potestad de legislar, teñida por las características de la seguridad social, y con un régimen especial que le constriñe a brindar las prestaciones particulares del seguro de riesgos no sólo a los trabajadores que estuvieren asegurados, sino también respecto de aquellos sobre los cuáles el empleador no hubiere tenido igual recaudo. Una vez satisfecho este débito, se agota el contenido de la seguridad social, pero toma relevancia la otra vertiente mencionada, esto es, la relación entre la aseguradora y el empleador. Si el trabajador que ha sido víctima de un infortunio en el desempeño de sus labores subordinadas fue asegurado previamente, es claro que la relación entre el tomador del seguro (patrono) y la aseguradora se desempeña dentro de la circunscripción contractual de naturaleza mercantil. Sin embargo, en la especie, la intervención del Instituto se produjo sin que mediara relación jurídica obligatoria anterior entre el empleador y la aseguradora, por lo que debe determinarse cuál es el régimen aplicable.

VII.- Al existir una relación de especialidad entre el Derecho Mercantil respecto del Civil, en primer lugar debe pararse mientes en si el extremo origen de la controversia encuentra cabida en la primera disciplina, pues sólo en su defecto, sería aplicable la última normativa. El Código de Comercio ha definido sus condiciones de aplicación no sólo respecto de relaciones jurídicas obligatorias que tengan como fuente la autonomía de la voluntad (contratos), sino también a

aquellos supuestos que deban calificarse como “actos de comercio”. Así en efecto el artículo 1 del Código de Comercio, a la letra, fija: *“Las disposiciones contenidas en el presente Código rigen los actos y contratos en él determinados, aunque no sean comerciantes las personas que los ejecuten. Los contratos entre comerciantes se presumen actos de comercio, salvo prueba en contrario. Los actos que sólo fueren mercantiles para una de las partes, se regirán por las disposiciones de este Código”*. La doctrina nacional ha puesto en evidencia que el legislador patrio soslayó determinar los linderos, o, cuando menos, citar de modo enunciativo, ejemplos de lo que debía considerarse como actos de comercio. Sin embargo, el artículo 2 de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor puede brindar algunas luces sobre el punto, pues establece que el comerciante (empresario en la terminología en boga) desarrolla de manera habitual la actividad de ofrecer, distribuir, vender, arrendar, conceder, el uso o disfrute de bienes o servicios. Para determinarse si la atención y el pago de incapacidades efectuado por la ejecutante puede calificarse como acto comercial, debe considerarse que no había contrato con el empleador, pero que por mandato legal debió cubrir a favor del trabajador el débito que corresponde al patrono. La cobertura asumida por la ejecutante es inmanente a la actividad que desempeña, es decir, se encuentra dentro del giro de su negocio, esto es, la asunción de las consecuencias indemnizatorias de riesgos asegurables, actividad que se realiza con fin de lucro y en forma profesional; por lo cual, al menos para la entidad, se encuentra dentro del supuesto normado en el primer ordinal del Código de Comercio, según el cual los **actos** que sólo fueren mercantiles para una de las partes se reputarán de índole comercial. Sentado lo anterior, debe

determinarse cuál es el plazo de prescripción para el reclamo que formula la entidad aseguradora.

VIII.- El fallo que ahora se ataca define que es el numeral 304 del Código en comentario, con carácter de norma especial, la regla aplicable a la controversia. El artículo establece: *“Los derechos y acciones para reclamar las prestaciones que establece este Título **prescriben en dos años, contados desde el día en que ocurrió el riesgo o en que el trabajador esté en capacidad de gestionar su reconocimiento, y en caso de su muerte a partir del deceso.** La prescripción no correrá para el trabajador no asegurado en el Instituto Nacional de Seguros, cuando siga trabajando a las órdenes del mismo patrono sin haber obtenido el pago correspondiente o cuando el patrono continúe reconociendo el total o parte del salario al trabajador o sus causahabientes”.* (El destacado no proviene del original). La disyuntiva estriba en si la norma es aplicable únicamente a los reclamos que el trabajador dirige contra la entidad aseguradora, que según fue expuesto se origina en la seguridad social, o está en la otra faceta privada que se produce entre la aseguradora y el patrono. En primer lugar debe tomarse en cuenta que, siendo la prescripción una causa extintiva de un derecho (artículo 865 del Código Civil), para el inicio de su conteo es necesario que el titular esté en posibilidades objetivas de formular el reclamo sin que exista ninguna circunstancia que lo impida, principio de carácter general recogido en los ordinales 874 del Código Civil y 969 in fine del Código de Comercio. Desde esta perspectiva, no existe ninguna duda que el empleado tiene posibilidad de plantear la gestión contra el Instituto Nacional de Seguros (en lo sucesivo designado por su acrónimo) inmediatamente después del suceso dañoso, o bien, si las secuelas del accidente se lo impiden, en el momento en que esté en capacidad de

formularlo. Asimismo, en caso de muerte del empleado, sus sucesores tendrán como punto de partida el plazo de dos años a partir del fallecimiento. Sin embargo, no es plausible afirmar el momento del percance como tiempo de inicio para el conteo de la prescripción del cobro que formula la aseguradora contra el patrono, porque, verbigracia podría acontecer que el reclamo se plantee cerca del percance, o algún tiempo considerable después, con lo cual podría producirse el absurdo de que habiéndose gestionado el pago ante el Instituto el último día de la fecha de prescripción, la aseguradora no tendría plazo para plantear la acción de regreso contra el empleador. Igual reflexión cabe hacer en lo que atañe al supuesto de muerte del trabajador. Además, en los casos en los que es necesaria atención médica, sólo cuando el afectado es dado de alta se puede determinar la totalidad del monto cubierto. Previo a ello, el asegurador está impedido para gestionar el cobro en la vía prevista, pues no cuenta con la liquidación de las sumas que efectivamente cubrió. Todo esto lleva a concluir que el ordinal contempla únicamente el plazo de prescripción para los reclamos del trabajador, no así los del Instituto Nacional de Seguros, pues los supuestos de hecho previstos no son aplicables a la aseguradora.

IX.- Al no existir norma especial en el Código de Trabajo que regule el plazo de prescripción del reclamo del asegurador contra el patrono que omitió incorporar al régimen de riesgos laborales a sus subordinados, y atendiendo a lo señalado en el Considerando VII, debe actuarse el canon general de prescripción mercantil, ergo, el párrafo primero del ordinal 984 del Código de Comercio, para concluir que corresponde a cuatro años, por lo cual, si el plazo comenzó a correr el 19 de octubre de 1999, fecha en la cual el trabajador fue dado de alta, y el 27 de agosto del 2002 fue interrumpido por mediar emplazamiento, debe concluirse

que el reclamo por el capital no está prescrito. Distinta suerte corre el pedimento relacionado con los réditos, pues éstos tienen un plazo de prescripción anual, según el inciso b) del canon 984 del Código de Comercio, de ahí habiendo reclamado el ejecutado la prescripción de los intereses, considerando que el emplazamiento se concretó hasta el 27 de agosto del 2002, los réditos devengados desde el 19 de octubre de 1999 hasta el 26 de agosto del 2001 deben denegarse. Con todo, sólo pueden cobrarse los devengados a partir del 27 de agosto del 2001 y hasta el 10 de junio del 2002, que son los parámetros que utiliza el A Quo con base en la petición del despacho de ejecución, calculado al 22 por ciento anual lo cual equivale a ¢120.377,36. En consecuencia, por los motivos señalados, ha de acogerse el recurso interpuesto, para anular el fallo del Ad Quem, y resolver por el fondo, confirmando el del A Quo, excepto en cuanto al acápite de intereses que se revoca, para fijarlos en el monto de ¢120.377,36. En lo demás, ha de confirmarse el fallo del A Quo.

POR TANTO

Por mayoría se declara con lugar el recurso de casación interpuesto. Se anula la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, y resolviendo por el fondo se revoca la del Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios, únicamente en cuanto al acápite de intereses, para declarar prescritos los devengados del 19 de octubre de 1999 al 27 de agosto del 2001, y fijar los réditos del 28 de agosto del 2001 al 10 de junio del 2002 en la suma de ¢120,377,36. En lo restante se confirma el fallo del A Quo.

Anabelle León Feoli

Luis Guillermo Rivas Loáiciga

Román Solís Zelaya

Óscar Eduardo González Camacho

Carmenmaría Escoto Fernández

Voto Salvado de las Magistradas León Feoli y Escoto Fernández.

Con el debido respeto a la decisión de nuestros compañeros, nos separamos del criterio de mayoría y salvamos el voto en los siguientes términos:

I.- Si bien el contrato de seguro puede tener carácter mercantil, tal calidad sólo se sostiene en el caso de que el mismo sea el resultado de un negocio jurídico, de libre consentimiento, mediante el cual una persona, asegurado, contrata con otra, asegurador, el pago de una determinada suma de dinero, pactado bajo una condición suspensiva de un hecho futuro e incierto. Sin embargo, no puede estimarse lo mismo cuando el seguro no nace de una convención sino que es impuesto en la ley. En este caso, desaparece del contrato la autonomía privada, pues el obligado no puede rehusarse de manera lícita a suscribirlo. En consecuencia, el mismo pasa a convertirse en una carga social impuesta a dicho obligado. En lo concerniente al seguro por riesgos laborales, su naturaleza forzosa se desprende de lo establecido en el ordinal 193 del Código de Trabajo, el cual exige al patrono el aseguramiento de sus trabajadores ante el Instituto Nacional de Seguros. Por consiguiente, en esta clase de seguro no hay libre consentimiento para el patrono en cuanto contratar o no la póliza. Asimismo, no queda a su voluntad decidir los alcances de cobertura del este seguro ni su

renovación. Su función es tuitiva, en el tanto busca proteger al trabajador por las lesiones que pueda sufrir en el desempeño de sus labores. Y esa situación, evidentemente descarta la posibilidad de que se le pueda dar al tema del seguro por riesgos laborales una connotación de orden mercantil. Por lo tanto, sería improcedente regular los plazos de prescripción a partir del Código de Comercio, pues aunque sea lo pertinente para los seguros libremente consensuados, no lo es así para las cargas sociales impuestas a las empresas. Entonces, si no puede ser aplicada aquella normativa, deberá emplearse la general, es decir, el Código Civil ante el silencio que, sobre este extremo, guarda el Código de Trabajo. En tal sentido y por vía de interpretación analógica, el precepto correspondiente a este asunto es el 869, incisos 1 y 2, de dicho Código Civil, el cual regula un trienio como lapso para las acciones tendientes a pedir el pago de intereses por obligaciones de duración mayor a un semestre, el primero, y las correspondientes a cobrar sueldos, honorarios y emolumentos por servicios profesionales, la segunda. Lo anterior al tratarse de la regulación del plazo prescriptivo del reclamo del ente asegurador contra el patrono, quien omitió asegurar al trabajador. Además, como característica del sub lite, debe aunarse que en este caso concreto, ni siquiera hubo suscripción del seguro obligatorio por parte del demandado, por lo cual no existe, siquiera, el seguro en sí, lo cual viene a desmeritar, aún más, la posibilidad de tener como comercial el correspondiente a riesgos del trabajo. En conclusión, por su carácter de carga social, la ausencia de libre consentimiento para el patrono y, en este asunto concreto, la falta total de la suscripción del seguro, permite concluir que el cuerpo legal aplicable al de riesgos laborales es el Código Civil y no el Código de Comercio, contrario a lo estimado en el voto de mayoría, por no estar frente a un negocio jurídico mercantil.

II.- Acorde con lo expuesto, en el caso concreto debe considerarse que el accidente ocurrió el día 21 de diciembre de 1994; la prestación de servicios médicos se dio por concluida en fecha 19 de octubre de 1999, además, el INS subsidió al trabajador desde el 23 de agosto de 1997 hasta dicho 19 de octubre de 1999. En ambos casos, la atención del INS se prolongó por más de un semestre. Entonces, si el plazo prescriptivo se inició en esta última fecha, evidentemente el lapso de tres años al momento de notificarse el auto que cursa la demanda, acto interruptor de tal instituto, a tenor de lo previsto en el numeral 296 inciso a) del Código Procesal Civil, no se había cumplido, pues el mismo acaeció el 8 de agosto del 2002 y se hubiera completado hasta el 19 de octubre de ese mismo año. Por ende, el derecho del Instituto Nacional de Seguros no está prescrito, tanto en lo correspondiente al principal como a los intereses. En consecuencia, procede acoger el recurso, anular parcialmente el fallo impugnado en cuanto declaró prescrito el cobro de la obligación principal y sus intereses y, resolviendo por el fondo, confirmar la sentencia de primera instancia que en relación a estos extremos, rechazó la excepción de prescripción.

Anabelle León Feoli

Carmenmaría Escoto Fernández

Rec: 607-03
gdc.